RECURSO DE APELACION. Monto del agravio.

Para que resulte admisible el recurso de apelación en función de lo dispuesto en CPC, 348, el monto del agravio debe superar la cantidad de \$ 250.000 (a mayo de 1980). *

Buttigliero, Mateo c. Golin, Antonio

Rosario, 16 de mayo de 1980. Y considerando: Que según lo reconoce expresamente el impugnante, el monto del agravio que le ocasionaría el decisorio recurrido no alcanza la suma de \$ 250.000 que, por aplicación de las pautas interpretativas adoptadas por esta Sala a partir del caso "Carezani c/Strappa" debe considerarse el monto mínimo del agravio para lograr la apertura de la Alzada.

Que, por lo expuesto, se encuentra que ha sido mal concedida la apelación interpuesta.

Que atendiendo el carácter oficioso de esta decisión, corresponde imponer por su orden las costas devengadas en la instancia.

Que, por lo expuesto, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve: Así declararlo. Insértese, hágase saber y bajen. Alvarado Velloso. — Casiello. — Isacchi.

* Nota a fallo

La Sala III de nuestra Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial reitera la tesis interpretativa que ya sostuviera inicialmente dentro de los autos "Carezani c. Strappa" (ver Juris 57-111), mediante la cual condiciona la admisibilidad del recurso de apelación a la existencia de un agravio real que supere el monto actual de \$ 250.000.

Con ello se efectúa una tarea indexatoria de las cantidades previstas en el art. 348 CPC, que llena una evidente carencia legislativa. En efecto, si se tiene en cuenta que en el mes de febrero de 1962 —fecha en que entrara en vigencia la ley 5531— la apertura de la Alzada se lograba sólo cuando la sentencia producía un agravio superior a los dos mil pesos en la justicia letrada, poco cuesta advertir que ello se tornó letra muerta apenas comenzada nuestra carrera inflacionaria. Conforme devendría de aplicar la norma tal cual se encuentra legislada, resulta que no habría —de hecho— materia inapelable en función del monto del agravio, cosa que no surge ni del texto de la ley ni el espíritu del legislador. De ahí que nos parezca correcta la tesis sustentada, pues ella —además de llenar el ya denunciado vacío legislativo— permitirá a nuestras Cámaras una correcta labor jurisdiccional, hoy impedida por el notorio exceso de expedientes que llegan a su conocimiento ante la tácita derogación de la sabia norma prevista en CPC, 348.

Fernando Povo